

**IMPACTO GENERADO EN LA JUSTICIA CIVIL COLOMBIANA POR LA  
EXPEDICIÓN DE LA LEY 2213 DE 2022  
(Resumen Analítico)**

***IMPACT GENERATED ON COLOMBIAN CIVIL JUSTICE BY THE ISSUANCE  
OF LAW 2213 OF 2022  
(Analytical Summary)***

**Autores (*Authors*):** PELÁEZ PABON, Daniel Enrique

**Facultad (*Faculty*):** de FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

**Programa (*Program*):** de DERECHO

**Asesor (*Support*):** Mg. JOSE FERNANDO ERASO SARASTY

**Fecha de terminación del estudio (*End of the research*):** noviembre 2024

**Modalidad de Investigación (*Kind of research*):** Trabajo de Grado

**PALABRAS CLAVE**

IMPACTO GENERADO  
JUSTICIA CIVIL  
LEY 2213 DE 2022  
LA JUSTICIA DIGITAL

**KEY WORDS**

*IMPACT GENERATED  
CIVIL JUSTICE  
LAW 2213 OF 2022  
DIGITAL JUSTICE*

**RESUMEN:** en Colombia, la digitalización judicial comenzó con la Ley 270 de 1996, pero se aceleró en 2020 por la pandemia de COVID-19. El Decreto 806 de 2020 implementó audiencias virtuales, notificaciones electrónicas y procesos tecnológicos. Debido a su efectividad, aunque inicialmente transitorio, en 2022 se adoptó de forma permanente mediante la Ley 2213, consolidando el uso de TIC en el sistema judicial. Por consiguiente, en el estudio se presentó como objetivo evaluar el impacto generado en la justicia civil colombiana por la expedición de la ley 2213 de 2022.

La metodología de investigación, se desarrolló bajo un paradigma cualitativo

descriptivo y omnicomprensivo del fenómeno o proceso que estudia, con un paradigma hermenéutico, ya que, se pretende la interpretación de las disposiciones legales, más concretamente de la Ley 2213 de 2022. El tipo de investigación fue; documental y descriptiva.

La técnica empleada para la obtención de información fue el análisis documental, llevado a cabo mediante una indagación exhaustiva y organizada de fuentes primarias, tales como la Constitución Política de Colombia, sentencias relevantes de las Altas Cortes y herramientas procesales orientadas a garantizar la tutela judicial efectiva. En este contexto, la Ley 2213 de 2022 se destacó como un referente fundamental para evaluar la implementación de la justicia digital. Se utilizó una ficha de análisis documental como herramienta, lo que permitió estructurar, categorizar y valorar de manera rigurosa y objetiva los datos obtenidos, fortaleciendo el rigor del estudio. Esto evidenció cómo el garantismo jurídico se extiende a la justicia digital, destacando la necesidad de que las normas procesales digitales se alineen con estos principios para garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales.

**ABSTRACT:** *in Colombia, judicial digitalization began with Law 270 of 1996, but accelerated in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Decree 806 of 2020 implemented virtual hearings, electronic notifications and technological processes. Due to its effectiveness, although initially transitory, in 2022 it was adopted permanently through Law 2213, consolidating the use of ICT in the judicial system. Therefore, the objective of the study was to evaluate the impact generated in Colombian civil justice by the issuance of Law 2213 of 2022.*

*The research methodology was developed under a qualitative descriptive and all-encompassing paradigm of the phenomenon or process studied, with a hermeneutical paradigm, since the interpretation of the legal provisions is intended, more specifically Law 2213 of 2022. The type of research was; documentary and descriptive.*

*The technique used to obtain information was documentary analysis, carried out through an exhaustive and organized investigation of primary sources, such as the Political Constitution of Colombia, relevant rulings of the High Courts and procedural tools aimed at guaranteeing effective judicial protection. In this context, Law 2213 of 2022 stood out as a fundamental reference to evaluate the implementation of digital justice. A documentary analysis sheet was used as a tool, which allowed the data obtained to be structured, categorized and evaluated in a rigorous and objective manner, strengthening the rigor of the study. This showed how legal guarantees extend to digital justice, highlighting the need for digital procedural rules to align with these principles to guarantee the effective protection of fundamental rights.*

**CONCLUSIONES:** la implementación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia data de 1996, cuando se dio luzes a partir de la ley estatutaria de administración de justicia, pese a ello debieron transcurrir 26 años para una real implementación que surgió a partir de una pandemia mundial que casi que obligó a la reestructuración de modos de vida y entre ellos a la modificación de los que aún está en construcción.

El expediente electrónico es una nueva tendencia que requiere de organización, tiempo y amplia carga laboral para que los funcionarios puedan digitalizar expedientes que en muchas ocasiones son de varios tomos y más de mil folios. Igualmente es importante indagar cómo se va a implementar la seguridad de la información del expediente digital, puesto que actualmente predominan delitos informáticos que pueden llevar a la eliminación del expediente con un solo “click”, a la modificación o suplantación de documentos, así como también a la invasión de privacidad o abuso de acceso a la información.

La expedición de la Ley 2213 de 2022 marca un hito significativo en la modernización de la justicia civil en Colombia, al establecer la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020, lo que refleja una clara intención del legislador de incorporar de manera definitiva las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales, respondiendo a la necesidad de descongestión y mayor eficiencia en el sistema judicial, sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas requiere una infraestructura tecnológica sólida y capacitación continua de los operadores judiciales para garantizar su adecuada aplicación.

Los resultados obtenidos indican que las herramientas digitales introducidas por la Ley 2213 de 2022 han contribuido a reducir los tiempos procesales y los costos operativos en los procesos civiles, permitiendo una mayor celeridad en el desarrollo de los procesos judiciales, aunque también han generado una sobrecarga administrativa para los juzgados, derivada de la digitalización de expedientes y la adaptación de los sistemas tradicionales, por lo cual resulta imperativo fortalecer la capacidad operativa y los recursos humanos para enfrentar estos desafíos.

**CONCLUSIONS:** *the implementation of new technologies in the administration of justice dates back to 1996, when light was shed from the statutory law on the administration of justice. Despite this, 26 years had to pass for a real implementation that arose from a global pandemic that almost forced the restructuring of ways of life and among them the modification of those that are still under construction.*

*The electronic file is a new trend that requires organization, time and extensive workload so that officials can digitize files that are often several volumes and more*

*than a thousand pages long. Likewise, it is important to investigate how the security of the information in the digital file is going to be implemented, since computer crimes currently predominate that can lead to the deletion of the file with a single "click", the modification or impersonation of documents, as well as to invasion of privacy or abuse of access to information.*

*The issuance of Law 2213 of 2022 marks a significant milestone in the modernization of civil justice in Colombia, by establishing the permanent validity of Decree 806 of 2020, which reflects a clear intention of the legislator to definitively incorporate Information Technologies. Information and Communications (ICT) in judicial processes, responding to the need for decongestion and greater efficiency in the judicial system, however, the effective implementation of these measures requires a solid technological infrastructure and continuous training of judicial operators to guarantee its proper application.*

*The results obtained indicate that the digital tools introduced by Law 2213 of 2022 have contributed to reducing procedural times and operational costs in civil processes, allowing greater speed in the development of judicial processes, although they have also generated an administrative overload. for the courts, derived from the digitization of files and the adaptation of traditional systems, which is why it is imperative to strengthen operational capacity and human resources to face these challenges.*

**RECOMENDACIONES:** se sugiere a los jueces de la República adoptar una actitud paciente y una interpretación precisa de las normas procesales vigentes, que les atribuyen un papel más dinámico debido al desconocimiento aún presente entre los usuarios del sistema judicial. Este enfoque constituye un avance significativo para mejorar la administración de justicia y garantizar un acceso más eficiente y equitativo a esta por parte de los ciudadanos. Sin embargo, es evidente que la modernización tiene un impacto transversal en todas las actividades realizadas por el sector judicial.

Como parte de las acciones concretas, se recomienda establecer alianzas estratégicas con entidades como Consultorios Jurídicos, Personerías Municipales, Defensoría del Pueblo e ICBF, con el propósito de apoyar a la población vulnerable que enfrenta barreras para acceder a las herramientas digitales, garantizando así un enfoque inclusivo en la prestación del servicio de justicia.

Finalmente, se recomienda implementar políticas públicas enfocadas en garantizar acceso a infraestructura tecnológica y conectividad, particularmente en zonas rurales y entre poblaciones de bajos ingresos. Esto incluye dotar a los despachos judiciales de tecnología adecuada y fomentar la inclusión digital de los usuarios del sistema judicial. Asimismo, es crucial establecer un sistema de seguimiento continuo que evalúe la eficacia y eficiencia de las medidas introducidas por la Ley

2213 de 2022, asegurando su alineación con los principios de la tutela judicial efectiva y la equidad en el acceso a la justicia. Complementar el análisis presentado con ejemplos específicos de providencias judiciales y fomentar investigaciones adicionales contribuirá a fortalecer la base teórica y empírica sobre la justicia digital, permitiendo un análisis más robusto y completo del impacto de esta normativa.

**RECOMMENDATIONS:** *It is suggested that the judges of the Republic adopt a patient attitude and a precise interpretation of the current procedural rules, which attribute to them a more dynamic role due to the lack of knowledge still present among users of the judicial system. This approach constitutes a significant advance to improve the administration of justice and guarantee more efficient and equitable access to it by citizens. However, it is evident that modernization has a transversal impact on all activities carried out by the judicial sector.*

*Evaluate the socioeconomic impact: Analyze the short and long-term effects of the implementation of an employee fund on the economic and social well-being of workers, considering different socioeconomic strata and salary levels.*

*Finally, it is recommended to implement public policies focused on guaranteeing access to technological infrastructure and connectivity, particularly in rural areas and among low-income populations. This includes providing judicial offices with appropriate technology and promoting the digital inclusion of users of the judicial system. Likewise, it is crucial to establish a continuous monitoring system that evaluates the effectiveness and efficiency of the measures introduced by Law 2213 of 2022, ensuring their alignment with the principles of effective judicial protection and equity in access to justice. Complementing the analysis presented with specific examples of judicial rulings and encouraging additional research will contribute to strengthening the theoretical and empirical basis on digital justice, allowing for a more robust and complete analysis of the impact of this regulation.*